

Opacidad institucional y derecho a la información:

Balance a más de un mes del sismo en Venezuela

(24 de junio – 03 de agosto de 2026)



1. Datos técnicos y geográficos:

- **Fecha y hora:** 24 de junio de 2026, a las 6:04 p.m. hora local.
- **Naturaleza:** dos movimientos telúricos de alta intensidad y consecutivos (doblete sísmico).
- **Primer sismo:** magnitud 7,2, con epicentro a 25 km al este de San Felipe, estado Yaracuy.
- **Segundo sismo:** magnitud 7,5, ocurrido apenas 39 segundos después del primero, cuyo epicentro fue en Catia La Mar.
- **Brecha institucional:** el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) catalogó el fenómeno como un “doblete sísmico”; al 24 de julio de 2026, Funvisis no adopta este término en su portal web ni en sus infografías oficiales, donde titula el evento simplemente como “Actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026”.

2. Brecha de datos: cifras oficiales vs. cifras internacionales

Al cumplirse un mes del evento, el contraste de balances evidencia el rezago informativo de las fuentes oficiales frente a los registros internacionales:

- **Personas fallecidas:** cifra oficial: 5.546 decesos reconocidos | cifra OCHA: 5.398 fallecidos registrados.
- **Personas heridas:** cifra oficial: más de 16.740 lesionados | cifra OCHA: 16.740 heridos reportados.
- **Personas sin vivienda:** cifra oficial: 17.907 | cifra OCHA: 17.907 damnificados.
- **Población en necesidad:** cifra oficial: no publicado en la web | cifra OCHA: 1,3 millones en necesidad urgente.
- **Edificaciones afectadas:** cifra oficial: 856 afectados (190 colapsados) | cifra OCHA: 856 afectadas (190 colapsadas).
- **Pérdidas materiales:** cifra oficial: no publicado en la web | cifra OCHA: 37.000 millones de dólares.
- **Réplicas registradas:** cifra oficial: 1.883 réplicas acumuladas | cifra OCHA: más de 1.463 réplicas.
- **Personas rescatadas:** cifra oficial: 6.462 rescatadas con vida (dato acumulado y pausado) | cifra OCHA: sustentado en partes de cuerpos de salvamento.

3. Indicadores de opacidad, censura y control institucional

- **Riesgo ambiental:** el 100 % de los expertos denuncia información oficial incompleta; el Estado niega el acceso a datos técnicos base en La Guaira, que concentra el 75 % de las afectaciones geológicas a nivel nacional (60 % de grietas profundas y 40 % de daños estructurales severos dentro de la propia entidad).
- **Censura hospitalaria:** el 70 % del personal de salud consultado en el ámbito nacional siente temor a declarar por miedo a represalias y al 60 % de los recintos asistenciales se les prohíbe el acceso a periodistas independientes; en La Guaira, en cambio, el 100 % de los consultados reporta libre acceso de la prensa, un contraste que se explica por la naturaleza voluntaria y no estatal del personal médico desplegado en la zona.

- **Secretismo presupuestario:** el 90 % de los hospitales en el ámbito nacional mantiene una opacidad absoluta sobre compras de emergencia y asignaciones presupuestarias extraordinarias; en La Guaira, el 100 % de los consultados confirma que tampoco existe un registro público sobre el ingreso y destino de la ayuda humanitaria.
- **Coerción comunitaria:** el 17,4 % de las comunidades en el ámbito nacional reportó amenazas de funcionarios (como el retiro de las bolsas CLAP) para evitar que fotografíen infraestructuras colapsadas, generando un efecto de inhibición en el 91,3 % de la población; en La Guaira esta práctica es proporcionalmente mayor, con un 36,36 % de los encuestados que denuncia la prohibición explícita de fotografiar o filmar infraestructuras colapsadas.
- **Silencio administrativo:** las solicitudes de información enviadas el 17 de julio de 2026 a los ministerios de Salud y Ecosocialismo no han recibido respuesta al cierre de este informe.

4. Infraestructura y cerco de medios

- **Estado La Guaira:** pérdida absoluta por colapso de sedes y antenas en RNV (Dial 107), Enlace RV (afectada por incendio) y Radio Urimare; Radio Coral inoperativa por daños parciales; el diario La Verdad de Vargas opera con restricciones por daños en su sede del Casco Histórico.
- **Estado Carabobo:** entre 34 y 40 trabajadores radiales afectados; las emisoras Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 se encuentran inactivas en sus estudios principales y en proceso de reubicación por fallas estructurales.

5. Servicios básicos e incomunicación post-terremoto

- **Energía eléctrica:** el 95,7 % de los ciudadanos en el ámbito nacional carece de cronogramas de racionamiento de CORPOELEC (90,91 % en La Guaira) y el 21,7 % padece apagones superiores a las 12 horas continuas (18,18% en La Guaira).
- **Apagón en conectividad:** en el país, el 60,9 % reporta señal móvil intermitente y solo el 21,7 % percibe normalidad, mientras que para el internet fijo el 56,5 % lo reporta inestable y el 30,4 % inoperativo; en La Guaira, el 63,63 % señala que la estatal CANTV directamente no opera en su sector, lo que evidencia un problema de ausencia estatal más que una consecuencia exclusiva del sismo.
- **Agua potable:** en el 43,5 % de las comunidades consultadas el agua llega sin condiciones de potabilidad y un 13 % presenta corte total por tuberías, cifra que en La Guaira escala al 72,72 % de corte total; Hidrocapital y las hidrológicas regionales no han difundido reportes técnicos en ninguno de los dos escenarios.

I. Contexto

El 24 de junio de 2026, a las 6:04 de la tarde, Venezuela registró un movimiento telúrico de alta intensidad. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó el fenómeno natural a través de dos alertas institucionales **consecutivas y por separado: la Nota Informativa ID 2915** detalló el primer movimiento de magnitud 7,2 con epicentro ubicado a 25 kilómetros al este de San Felipe, estado Yaracuy ubicado al centro occidental del país¹; mientras que la **Nota Informativa ID 2914** registró el segundo evento de magnitud 7,5 ocurrido apenas 39 segundos después² y su epicentro fue en Catia La Mar, según reportó el pasado 6 de julio de 2026 el Servicio Geológico de Estados Unidos³.

Hasta la fecha, **no existe un comunicado oficial, nota de prensa web ni infografía diseñada por Funvisis que asuma explícitamente el término "doblete sísmico"**. En los mapas oficiales de sismicidad publicados por el ente, el fenómeno es titulado estrictamente como “Actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026” y “sismicidad acumulada”. Esta catalogación técnica de “Doblete” fue identificada externamente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)⁴.

El 24 de junio de 2026, Delcy Rodríguez no ofreció un balance oficial de personas fallecidas, desaparecidas, lesionadas ni una cuantificación de daños estructurales a consecuencia de los sismos; por el contrario, declaró acerca de las medidas de contingencia inmediatas, a saber: decretó el estado de emergencia, creó el Estado Mayor, suspendió las actividades, y convocó al personal médico del país. En esta declaración inicial no definió planes de acción para las personas refugiadas, la ubicación de centros de acopio ni las funciones asignadas a los cuerpos de orden del Estado.

Para el 24 de julio de 2026 los datos oficiales emitidos por el Estado de Venezuela registran un aumento en el número de personas fallecidas llegando a los 5.546 muertos, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16.740. Se registraron 856 edificios afectados y 190 colapsados, 17.907 personas damnificadas y más 1.500 réplicas⁵. Al menos, 31.745 voluntarios se encuentran atendiendo la emergencia⁶, sin embargo, el Estado no emitió cifras sobre el total de personas desaparecidas; las últimas estimaciones fueron dadas por el Estado el pasado 30 de junio de 2026, ubicándolas en 157⁷. En contraste, la ONU estima que el número de personas

¹ Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). (24 de junio de 2026). Sismo de magnitud 7,2 se registró hoy en San Felipe. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Nota Informativa ID 2915. Disponible en: <http://www.funvisis.gob.ve/noticia.php?id=2915>

² Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). (24 de junio de 2026). Sismo de magnitud 7,5 se registró hoy en San Felipe. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Nota Informativa ID 2914. Disponible en: <http://www.funvisis.gob.ve/noticia.php?id=2914>

³ The El News. (31 de julio de 2026). El epicentro del 2do sismo fue Catia La Mar en La Guaira. Disponible en: <https://theelnews.org/2026/07/31/el-epicentro-del-2do-sismo-fue-catia-la-mar-en-la-guaira/>

⁴ U.S. Geological Survey (USGS). (24 de junio de 2026). M 7.5 - 16 km SW of Morón, Venezuela: Tectonic Summary & Executive Review. Comprehensive Earthquake Catalog. ANSS Advanced National Seismic System. Disponible en: <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zp/executive>

⁵ Prensa Asamblea Nacional. (25 de julio de 2026). Asciende a 5.546 número de fallecidos por doble terremoto. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/asciende-a-5546-numero-de-fallecidos-por-doble-terremoto>

⁶ Ibidem.

⁷ Prensa Asamblea Nacional. (25 de junio de 2026). Confirman 188 fallecidos y 1.520 heridos por terremotos. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/confirman-188-fallecidos-y-1520-heridos-por-terremotos>

desaparecidas; las últimas estimaciones fueron dadas por el Estado el pasado 30 de junio de 2026, ubicándolas en 157. En contraste, la ONU estima que el número de personas desaparecidas estaría en unas 50.000 personas⁸. Desde el pasado 24 de julio de 2026, a un mes del terremoto, las autoridades no han actualizado el balance oficial.

Desde el pasado 24 de julio de 2026, transcurrieron exactamente 10 días de silencio institucional en los que el Estado no ofreció información ni actualizó el balance sobre el saldo de víctimas y daños del terremoto en La Guaira. A la fecha del cierre de este informe, el 3 de agosto de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó una nueva actualización⁹.

En este reporte se informó que el número de muertos en Venezuela a causa de los terremotos alcanzó los 6.125, sumando otros 579 fallecidos respecto al balance oficial anterior¹⁰. Adicionalmente, indicó que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales. En cuanto a las afectaciones de infraestructura, se detalló que 43.679 viviendas han sido evaluadas¹¹. De un total de 41.624 viviendas con estatus definido, 25.325 resultaron habitables, 9.866 se encuentran restringidas y 6.433 están en alto riesgo¹².

Asimismo, el boletín informativo semanal del Plan Venezuela Renace reporta un total de 6.462 personas rescatadas, 287 viviendas entregadas y 346.755 toneladas de escombros recogidos. Hasta el pasado 12 de agosto de 2026, Funvisis había reportado 2.075 réplicas¹³.

Este reciente reporte estatal contrasta con el balance ofrecido el 4 de agosto de 2026 por el gobernador de La Guaira. Aunque el mandatario regional reafirmó la cifra de 6.125 muertos, indicó que 1.579 personas siguen desaparecidas basándose en la información que le suministran los familiares¹⁴. El gobernador advirtió, además, que algunas de las personas reportadas como fallecidas podrían estar todavía en el listado de desaparecidos, ya que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no los ha certificado como fallecidos¹⁵. La disparidad de las cifras se profundiza al observar iniciativas ciudadanas como **Desaparecidos Terremoto Venezuela**, las cuales han denunciado la existencia de más de 29.000 personas en paradero desconocido¹⁶; un dato sobre el cual, según la organización **Provea**, no hay “un registro público

⁸ Oscar Schlenker. (18 de julio de 2026). Terremotos en Venezuela: tras la cifra de fallecidos. En: Deutsche Welle (DW). Disponible en: <https://www.dw.com/es/terremotos-en-venezuela-tras-la-cifra-de-fallecidos/a-78020060>

⁹ Fanny Rose Pérez. (03 de agosto de 2026). Plan Venezuela Renace presenta balance actualizado de atención y reconstrucción tras la contingencia. En: YVKE Mundial. Disponible en: <https://radiomundial.com.ve/plan-venezuela-renace-boletin-informativo-reconstruccion/>

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). (02 de agosto de 2026). Observatorio Nacional de Sismos: Monitor en línea de la actividad sismológica nacional. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Disponible en: <http://www.funvisis.gob.ve/monitor.html>

¹⁴ Banca y Negocios. (04 de agosto de 2026). Gobernador de La Guaira estima que 1.579 personas siguen desaparecidas por terremotos. Disponible en: <https://www.bancaynegocios.com/gobernador-de-la-guaira-estima-que-1-579-personas-siguen-desaparecidas-por-terremotos/>

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Desaparecidos Terremoto Venezuela. (05 de agosto de 2026). Disponible en: <https://desaparecidosterremotovenezuela.com/>

*que lo respalde*¹⁷.

A los daños infraestructurales se suma una respuesta estatal tardía, los equipos de rescate actuaron 48 horas después. El Ejecutivo no ha presentado planes de contingencia ni ejecuciones presupuestarias sectoriales (salud, ecosocialismo). Mientras, en algunos sectores de La Guaira persisten fallas de conectividad que obligan al uso de soluciones satelitales privadas, la vocería oficial insiste en un restablecimiento casi total de los servicios, acentuando la desinformación de la población¹⁸.

Es por esto que este informe final hace un levantamiento de información donde se recopila datos sobre las vulneraciones al derecho a la información pública, y el derecho a la libertad de expresión durante el primer mes del movimiento sísmico en Venezuela, considerando como base del análisis el principio de **máxima publicidad**.

Considerando esto y los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución Nacional el pasado 17 de julio de 2026 la organización realizó dos solicitudes de información a los ministerios de Salud y Ecosocialismo solicitando detalles técnicos de los planes de atención, presupuesto ejecutado, gestión ambiental de escombros y canales de denuncia ante los eventos sísmicos, pero al cierre de este informe, ninguno de los entes ha emitido respuesta.

¹⁷ Banca y Negocios. (04 de agosto de 2026). Gobernador de La Guaira estima que 1.579 personas siguen desaparecidas por terremotos. Disponible en: <https://www.bancaynegocios.com/gobernador-de-la-guaira-estima-que-1-579-personas-siguen-desaparecidas-por-terremotos/>

¹⁸ El Diario. Gobierno encargado aseguró que se ha recuperado el 96 % del servicio eléctrico en La Guaira (9 de julio de 2026). Nota periodística que recoge los voceríos oficiales sobre la restitución del servicio eléctrico en el litoral central, en contraste con los reportes de incomunicación y fallas de conectividad que persisten en la entidad. Disponible en: <https://eldiario.com/2026/07/09/recuperacion-servicio-electrico-la-guaira/>

II. Metodología y alcance

Para la elaboración de este informe se diseñó una estrategia de recolección de datos mixta, orientada a documentar los datos de información pública en tres temáticas específicas: Salud, servicios básicos y ambiente tras el sismo. La primera fase consistió en la aplicación de tres instrumentos de recolección de información estructurados a través de formularios digitales, los cuales estuvieron activos desde el viernes 17 de julio hasta el lunes 20 de julio de 2026.

Estos cuestionarios estaban dirigidos a tres poblaciones clave: personal de salud, comunidades afectadas y observadores de riesgo ambiental/geológico. En total, se recabaron 37 respuestas distribuidas de la siguiente manera:

Formulario	Población objetivo	Respuestas
Acceso a la información y ambiente Post-Sismo	Observadores de riesgo ambiental/geológico	4
Censura y opacidad hospitalaria post-sismo	Personal de salud	10
Servicios básicos e incomunicación post-terremoto	Comunidades afectadas	23

En el caso del ecosistema de medios la triangulación de la información se realizó desde el 6 hasta el 21 de julio de 2026. El despliegue territorial para la recolección de datos abarcó a 8 estados: Yaracuy, Distrito Capital, Lara, Miranda, Sucre, Aragua y, de manera parcial, Carabobo y La Guaira. La muestra recabada está en su totalidad; por lo tanto, **las cifras expuestas deben interpretarse como indicativas de patrones de afectación y no como estadísticas representativas a nivel nacional.**

• Garantías de seguridad digital y confidencialidad

Los instrumentos fueron gestionados bajo estándares de seguridad digital y protección a las fuentes.

III. Hallazgos claves

El análisis de los datos levantados, tanto en las regiones objeto como en La Guaira, durante el primer mes del evento sísmico revela un **patrón sistemático de opacidad institucional, vulneración al derecho a la información y colapso estructural**. A continuación, se resumen los hallazgos claves:

- **Opacidad en la gestión de riesgo ambiental:** el 100 % de los consultados denuncia que la información oficial sobre las afectaciones es incompleta o contradictoria. Asimismo, se reporta que el Estado niega sistemáticamente el acceso a datos técnicos a expertos independientes, especialmente en La Guaira (que concentra el 75 % de las afectaciones geológicas, y donde, en su propia muestra focalizada que el 60 % reporta grietas profundas y el 40 % daños estructurales severos).
- **Censura e intimidación hospitalaria:** el 70 % del personal de salud siente temor a informar por temor a represalias. Además, el 60 % de los recintos prohíbe el acceso a la prensa por “órdenes superiores” y el 90 % mantiene una total opacidad en la rendición de cuentas sobre compras de emergencia. En La Guaira, en cambio, el 100 % de los consultados reporta libre acceso de la prensa a los centros de salud, un contraste que no responde a mayor transparencia estatal, sino a que el 100 % del personal médico que atiende la emergencia en la entidad es voluntario y opera al margen de las estructuras oficiales.
- **Colapso de servicios e indefensión informativa:** el 95,7 % de los ciudadanos carece de cronogramas públicos de racionamiento eléctrico de CORPOELEC. Los continuos apagones han creado un cerco comunicacional, con más del 56 % de la población reportando fallas críticas en internet y telefonía móvil que les impiden el reporte de emergencias y la comunicación con familiares o servicios de ayuda. En La Guaira el cerco es aún más marcado en internet fijo, el 63,63 % señala que la estatal CANTV directamente no opera en su sector, aunque en telefonía móvil un 45,45 % señala que es intermitente y la electricidad el 18,18 % sufren apagones prolongados, el Estado presenta cifras algo menores al promedio nacional.
- **Restricciones a la documentación ciudadana:** se documenta un patrón de restricción gubernamental, donde un 17,4 % reporta amenazas (incluyendo el retiro de beneficios sociales como las bolsas CLAP) para evitar que difundan fotos de las infraestructuras colapsadas. Esto deja al 91,3 % de la población en estado de indefensión informativa. **En La Guaira** esta práctica es proporcionalmente mayor: el 36,36 % de los encuestados denuncia la prohibición explícita de fotografiar o filmar infraestructuras colapsadas, y la totalidad de los consultados (100 %) reporta encontrarse en estado de desinformación, sin acceso alguno a cronogramas oficiales transparentes.
- **Devastación del ecosistema de medios:** la infraestructura radial sufrió daños críticos. En La Guaira, emisoras como RNV, Enlace RV y Radio Urimare reportan pérdida total de sus sedes. En el estado Carabobo, entre 34 y 40 trabajadores del sector radial resultaron directamente

afectados, obligando a emisoras de gran alcance como Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 a iniciar procesos de reubicación por fallas estructurales graves. En el propio estado La Guaira, la jornada de recolección focalizada confirmó además la pérdida de Radio Coral por daños parciales, consolidando la pérdida o inoperatividad de al menos cuatro emisoras en la entidad.

A) Acceso a la información y riesgo ambiental/geológico

En el marco de la contingencia ocasionada por el sismo en Venezuela, la evaluación de los riesgos ambientales y el acceso a los datos técnicos oficiales constituyen un requisito ineludible para el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales. Los datos recabados en este componente del diagnóstico evidencian barreras institucionales en materia de transparencia y gestión de riesgos.

En cuanto a **la identificación geográfica de las zonas con mayor riesgo ambiental o geológico derivado del evento sísmico**, el 75 % de los registros sitúa la principal afectación en el estado La Guaira, mientras que el 25 % restante corresponde al estado Lara. Respecto a la tipología de las afectaciones físicas y ambientales observadas en dichas zonas, predomina con un 50 % la presencia de grietas profundas en el suelo o la reactivación evidente de fallas geológicas. Asimismo, se reporta un 25 % de afectación por contaminación de fuentes de agua dulce debido a la rotura de tuberías matrices, y un 25 % correspondiente a daños estructurales severos en edificaciones públicas, puentes o vías.

En relación con **la transparencia institucional**, ante la consulta sobre si las autoridades ambientales, de infraestructura o de protección civil han publicado mapas de riesgo actualizados, zonas de evacuación obligatoria o informes técnicos sobre estas afectaciones, el 100 % de las respuestas coincide en que la información provista es incompleta, contradictoria, de difícil acceso o se encuentra desactualizada.

Por último, en lo que concierne **a la labor de expertos independientes, ingenieros y académicos universitarios para inspeccionar el terreno y evaluar el estado real del suelo y las estructuras**, el 100 % de los consultados señala que, si bien no se impone una prohibición directa de acceso a las zonas, el Estado les niega cualquier dato técnico base indispensable para avanzar en los estudios científicos.

B) Censura, opacidad y restricciones a la información en el sector salud post-sismo

La garantía de los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la transparencia adquiere un carácter crítico en los centros de salud durante la contingencia sísmica. La evaluación realizada en recintos hospitalarios pertenecientes al Distrito Capital (40 %), el estado Yaracuy (40 %), el estado Lara (10 %) y el estado Sucre (10 %) arroja una serie de patrones de opacidad institucional, vigilancia y restricciones al trabajo periodístico y de información.

En relación con la difusión de cifras sobre heridos y fallecidos, la mayoría de los consultados evidencia la prevalencia de mecanismos no formalizados de censura: el 70 % señala que no existe

una orden escrita formal, pero prevalece un temor generalizado a informar; el 10 % reporta la imposición de instrucciones verbales directas para restringir el contacto con la prensa, y un 20 % manifiesta que la información sobre víctimas fluye libremente.

Los testimonios advierten que *“siempre está latente el hostigamiento y amenazas al personal de salud”*¹⁹, lo que ha llevado a los trabajadores a mantener *“una posición de sumisión para evitar cualquier situación de hostigamiento”*²⁰. En esta misma línea, se reportan medidas de control administrativo como el *“cambio de directiva”*²¹ y prácticas explícitas de *“censura a la hora de publicar falta de insumos, listas de desaparecidos, información de morgue”*²².

En el plano físico e institucional, el 60 % de los centros evalúa que el acceso a periodistas independientes, reporteros gráficos y defensores de derechos humanos es negado por vía administrativa mediante el argumento de “órdenes superiores”. A esto se suma un 10% de casos donde la restricción de acceso y de toma de registro audiovisual es ejecutada directamente por cuerpos de seguridad (GNB, PNB, grupos civiles armados o directivas), mientras que un 30 % reporta que los medios ingresan e informan sin inconvenientes.

Respecto a **los ejecutores de estas medidas de bloqueo o prohibición de declaraciones a la prensa**, el 40 % corresponde a personal de milicia o seguridad interna del hospital, el 30 % a la directiva y autoridades médicas, el 20 % a cuerpos de seguridad del Estado (GNB, PNB, SEBIN, DGCIM) y el 10 % a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

En materia de **agresiones contra la prensa o trabajadores**, el 80 % indica que no se han consumado incidentes de decomiso o retención de equipos, mientras que el 20 % restante **reporta intentos no concretados de decomiso de material fotográfico o audiovisual**.

Asimismo, el 90 % señala que hasta la fecha no se han formalizado despidos ni suspensiones laborales contra el personal del centro de salud motivadas por la difusión de información.

La disponibilidad de información veraz para la localización de pacientes ingresados, heridos o fallecidos muestra deficiencias significativas. El 40 % de las respuestas indica la ausencia total de carteleras o registros públicos, obligando a los familiares a recurrir a contactos internos informales. Un 20 % califica la información pública existente como parcial, desactualizada o confusa, y un 40 % reporta la existencia de un registro público y ordenado para la ubicación de las víctimas.

En lo relativo al **condicionamiento de la atención médica**, el 60% señala que no se ha suspendido el servicio o los insumos a los heridos a cambio de silencio sobre las condiciones del hospital, aunque se mantiene una vigilancia estricta sobre las entradas y salidas del recinto. El 40 % afirma que la atención médica se maneja de forma independiente a los aspectos informativos.

¹⁹ Respuesta abierta de formulario digital (Censura y opacidad hospitalaria post-sismo). Recolección de datos, julio de 2026.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

²² Ibidem.

El **acceso a la información presupuestaria y de insumos en los centros de salud** refleja una opacidad casi absoluta. El 90 % de los consultados confirmó la ausencia total de reportes técnicos públicos, carteleras informativas o rendición de cuentas sobre la ejecución de recursos presupuestarios extraordinarios o compras de emergencia, mientras que el 10 % restante indica que la dirección del centro declaró dichos datos como confidenciales o reservados.

En cuanto **al abastecimiento de material médico-quirúrgico y medicamentos de emergencia**, un 30 % denuncia la falta absoluta de inventario en los almacenes técnicos, otro 30 % advierte que la entrega de insumos al personal de guardia se encuentra bajo asignación condicionada, un 20 % señala restricciones de acceso por resguardo de la directiva, y solo un 20% reporta un suministro regular disponible.

Por último, sobre la **recepción y manejo de ayuda humanitaria o donaciones destinadas a los centros asistenciales**, el 70 % manifiesta no haber registrado el arribo ni intentos de entrega de cargamentos humanitarios. Un 10 % informa que las donaciones fueron recibidas y almacenadas por la dirección sin la emisión de actas públicas de inventario, y un 20 % indica que las organizaciones donantes pudieron entregar los insumos formalmente.

C) Afectación de servicios básicos y cerco informativo post-sismo

La evaluación del acceso a servicios esenciales, midió el impacto del terremoto del 24 de junio en el suministro de telecomunicaciones, energía eléctrica, agua, saneamiento, gas doméstico, aseo urbano y manejo de desechos.

Los datos obtenidos revelan una **sistemática desprotección social y un déficit en la transparencia estatal frente a la contingencia**. El 95,7 % de la población consultada señala no tener acceso a ningún cronograma público de racionamiento por parte de CORPOELEC, lo que imposibilita la planificación ciudadana. A esta política de opacidad se suma la aguda inestabilidad del suministro eléctrico: un 56,5 % reporta severas fluctuaciones (“bajones” que ponen en riesgo el escaso patrimonio familiar), mientras que un 21,7 % padece apagones prolongados de más de 12 horas, configurando un escenario de privación sostenida de servicios básicos esenciales para la vida digna.

“ *Pasamos de 7 a 12 horas sin luz y sin acceso al internet, se me dañó el TV, y dos neveras se quemaron y por el poco sueldo aún sin poder acomodar, nadie responde por eso”. Asimismo, estas interrupciones afectan directamente la infraestructura residencial, donde “existen breves cortes de luz que afectan el uso de los ascensores (...) y la información de la alcaldía para solventar esta situación no es clara”* **”**

²³ Respuesta abierta de formulario digital (Servicios básicos e incomunicación Post-Terremoto). Recolección de datos, julio de 2026.

En materia de **agua potable y saneamiento ambiental**, el evento sísmico profundizó las deficiencias estructurales que ya afectaban al servicio. Los datos reflejan que en el 43,5 % de las comunidades consultadas el suministro se mantiene de forma intermitente y sin condiciones de potabilidad para el consumo humano. Asimismo, un 13 % de los sectores padece una interrupción total del servicio por tuberías, viéndose obligados a abastecerse de fuentes no seguras (ríos, manantiales o tomas callejeras improvisadas), mientras que otro 13 % depende exclusivamente de cisternas privadas ante la falta de un plan de distribución estatal gratuito.

Esta precariedad no es exclusiva de la emergencia reciente, tal como lo afirman los afectados:

“ *Mi comunidad no sufrió daños estructurales por el terremoto, sin embargo, desde hace años el problema con el agua es constante. Dependemos de camiones cisternas y advierten que en algunas zonas “tenemos 3 meses sin el vital líquido”* **”** ²⁴

A este escenario de precariedad se suma la **opacidad de los entes responsables**. Ni Hidrocapital (en el Área Metropolitana de Caracas) ni las hidrológicas regionales en el resto de los estados han difundido información sobre la calidad del agua ni sobre planes de distribución alternativa, ignorando formalmente los reportes comunitarios. Por otra parte, un 13 % de los consultados señala que, si bien las autoridades emiten comunicados alegando el funcionamiento “normal” de las plantas de tratamiento, dicha información contrasta con la realidad de las comunidades, donde el servicio no llega.

La garantía del **derecho a la comunicación y a la información** se encuentra comprometida tras la contingencia. El 60,9 % de los consultados enfrenta una señal móvil intermitente que imposibilita el reporte de emergencias (solo el 21,7 % percibe normalidad), mientras que el internet fijo opera bajo extrema inestabilidad (56,5 %) o se encuentra inoperativo a causa de las fallas eléctricas (30,4 %).

“ *Cuando se va la luz automáticamente quedamos sin señal, es imposible siquiera llamar a alguien” (salvo casos aislados donde operadoras como Movilnet envían alertas de cortes con 30 minutos de anticipación). Esta desconexión “impide la comunicación inmediata con familiares” y “no hay manera de expresar el peligro que corre y mucho menos solicitar ayuda* **”** ²⁵

A la precariedad de la infraestructura se suma un patrón de censura y coerción institucional. Un 34,8 % reporta que las emisoras locales de radio y televisión evitan transmitir información sobre las zonas en riesgo por temor a represalias. Más alarmante aún es la intimidación contra la

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

documentación ciudadana: un 17,4 % denunció amenazas directas contra habitantes y líderes comunitarios que intentan documentar la crisis. Estas restricciones incluyen la prohibición arbitraria de fotografiar infraestructuras públicas colapsadas y el uso de beneficios sociales (bolsas CLAP) como herramienta de chantaje, amenazando con su suspensión a quienes difundan información relativa a la emergencia en redes sociales o medios de comunicación.

Las restricciones han limitado también la veeduría sobre las ayudas, en ese sentido la ciudadanía percibe un:

“desvío de información precisa tanto de afectados como de las ayudas, denunciando que “existe muchos impedimentos por parte gubernamental (...) todo el mundo conoce que hay una necesidad, pero el matraqueo es lo que considero que hace que esa ayuda no llegue”. Al no contar con internet estable, la población “no permite tener información sobre zonas en peligro y menos información sobre ayuda humanitaria”

”²⁶

La **garantía de los derechos a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente** sano se encuentra comprometida tras la contingencia sísmica, una situación que se agrava frente a la opacidad institucional. En cuanto al suministro de gas doméstico, si bien un 39,1 % de los consultados reporta estabilidad en el servicio, la mayoría enfrenta privaciones significativas: el 39,1 % denuncia una distribución altamente irregular caracterizada por el desvío de cilindros o cobros excesivos por parte de actores no estatales; un 17,4 % señala la paralización del suministro sin explicaciones oficiales, presuntamente por daños en vía de acceso; y un 4,3 % advierte sobre una suspensión total que obliga a las familias a recurrir a la tala y quema de leña, exponiendo los riesgos respiratorios.

Simultáneamente, el **manejo de desechos sólidos refleja un riesgo sanitario inminente**; aunque el 39,1 % indica que el servicio opera regularmente, un 47,8 % califica la recolección como esporádica e insuficiente frente a la acumulación de escombros, y un 13% padece una paralización total que ha propiciado la creación de vertederos improvisados y focos de insalubridad en áreas residenciales.

Esta desprotección socioeconómica es profundizada por la vulneración sistemática del derecho a la información pública, el 91,3 % de la población **se encuentra en estado de indefensión informativa**, ya sea por **un silencio oficial absoluto** respecto a los planes de contingencia (47,8 %) o por la circulación de información escasa y basada en rumores (43,5 %), contrastando de manera alarmante con apenas un 8,7 % de los casos donde las autoridades han publicado cronogramas transparentes y accesibles.

La ciudadanía alerta sobre omisiones en materia de prevención: “Existen casas con muchas grietas y sin atención de Defensa Civil (...) a escasos 59 pasos tenemos un río

²⁶ Ibidem.

y nadie ha realizado una inspección, llueve todos los días y nadie da razones de seguridad”, concluyendo que “vivimos en manos de la misericordia de Dios porque las autoridades están en silencio sepulcral”²⁷.

Este “hermetismo comunicacional”²⁸ afecta especialmente en las zonas de mayor impacto. Los encuestados denuncian que “En Yaracuy la falta de información oficial (...) ha tenido como consecuencia un aumento de incertidumbre (...) y se desconoce a nivel nacional la situación de Veroes y Manuel Monge que fueron los epicentros”²⁹. Sin cifras, protocolos ni vocerías, los ciudadanos quedan aislados, donde “lo poco que se sabe es por los comentarios de los vecinos”³⁰, lo que propicia un ambiente crónico de zozobra, desinformación y miedo.

D) Afectación del ecosistema de medios de comunicación en La Guaira y Carabobo, tras los sismos del 24 de junio de 2026

El doblete sísmico del 24 de junio generó un impacto severo en la infraestructura operativa y técnica de los medios de comunicación en los estados La Guaira y Carabobo. El levantamiento preliminar de información, arroja un saldo crítico de inoperatividad, concentrado mayoritariamente en el sector radial.

Impacto general por región:

- **Estado La Guaira:** la vulnerabilidad geológica de la franja costera y la amplificación de ondas en suelos poco consolidados propiciaron el colapso de infraestructuras clave. El sector radial es el más perjudicado, registrando la pérdida absoluta de sedes por derrumbes o incendios (RNV, Enlace RV, Radio Urimare), mientras que otras emisoras permanecen inoperativas o en evaluación por daños severos. En el ámbito de la prensa, *La Verdad de Vargas* mantiene operatividad restringida e híbrida tras sufrir daños en su sede del Casco Histórico.
- **Estado Carabobo:** la amplificación sísmica en la cuenca del Lago de Valencia comprometió la estabilidad de edificios comerciales y residenciales. Se contabilizan entre 34 y 40 trabajadores del sector radial directamente afectados. A nivel operativo, emisoras de gran alcance como *Éxitos 93.1* y *La Mega 96.5* enfrentan procesos de reubicación obligatoria debido a fallas estructurales en sus instalaciones.

A continuación, se detalla el estatus operativo actualizado del ecosistema de medios evaluado:

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

Medio de comunicación	Tipo / Sector	Ubicación geográfica	Estatus actual
La Verdad de Vargas	Prensa escrita y digital	Casco Histórico de La Guaira, estado La Guaira	Operatividad restringida (flujo híbrido y reubicación temporal del personal)
RNV (Dial 107)	Radio	Playa Grande, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida absoluta por colapso total de la sede y antenas)
Radio Coral	Radio	Los Corales, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida absoluta por colapso total de la sede y antenas)
Voce Antiimperialistas	Radio comunitaria	Los Corales, estado La Guaira	Funcionamiento limitado (impacto moderado en la planta física)
Radio Naiguatá	Radio	Naiguatá, estado La Guaira	En evaluación (compromiso estructural severo)
Enlace RV	Radio	Catia La Mar, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida absoluta por colapso total de la sede y antenas)
Radio Uriname	Radio	Urbanismo Hugo Chávez, Urimare, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida absoluta por colapso total de la sede y antenas)
Éxitos 93.1	Radio	Estado Carabobo	En proceso de reubicación (daños estructurales en su sede)
La Mega 96.5	Radio	Estado Carabobo	En proceso de reubicación (daños estructurales en su sede)

Resultados específicos y ampliación de datos en el estado La Guaira

Tras el levantamiento territorial inicial (17 al 20 de julio de 2026), el 23 de julio se ejecutó una jornada adicional de recolección exclusiva en el estado La Guaira. Dada la compleja contingencia en la zona, se aplicaron formularios en físico que sumaron 22 respuestas distribuidas en los tres instrumentos del estudio. Aunque la muestra de los demás estados con 37 respuestas ya contemplaba una participación parcial de esta entidad, los nuevos datos serán contrastados, no adicionados, con los hallazgos generales.

Formulario	Población objetivo	Respuestas
Acceso a la información y ambiente Post-Sismo	Observadores de riesgo ambiental/geológico	2
Censura y opacidad hospitalaria post-sismo	Personal de salud	6
Servicios básicos e incomunicación post-terremoto	Comunidades afectadas	11

Debido a la compleja situación en la entidad, los instrumentos de recolección no fueron respondidos de forma digital por los participantes, sino mediante formularios en físico. En suma, los resultados evidencian un contexto agudo de colapso de servicios en La Guaira, mitigado en gran medida por la autogestión ciudadana y el despliegue del voluntariado.

A) Acceso a la información y riesgo ambiental/geológico

Respecto a la **tipología de las afectaciones físicas y ambientales observadas** en el estado, el 60 % de los consultados identificó grietas profundas en el suelo o reactivación evidente de fallas geológicas, mientras que el 40 % señaló daño estructural severo en edificaciones públicas, puentes o vías principales con riesgo de colapso.

En materia de **transparencia institucional**, el 80 % de las respuestas coincide en que la información provista por las autoridades ambientales, de infraestructura o de protección civil es incompleta, contradictoria, de difícil acceso o se encuentra desactualizada; el 20 % restante afirmó que existe un ocultamiento absoluto de la información técnica, en el sentido de que el Estado niega o minimiza el riesgo.

Sobre la **labor de expertos independientes, ingenieros y académicos** para inspeccionar el terreno, el 80 % de los consultados señala que, si bien no existe una prohibición directa de acceso a las zonas, el **Estado les niega el acceso a datos técnicos** base indispensable para avanzar en los estudios científicos.

B) Servicios básicos e incomunicación post-terremoto

En **telecomunicaciones**, el 45,45 % de los consultados reporta un servicio de telefonía móvil altamente intermitente que imposibilita las comunicaciones estables o el reporte de emergencias, frente a un 54,54 % que percibe normalidad. En internet fijo, el 63,63 % señala que CANTV no opera en su sector, un 18,18 % percibe normalidad, un 9,09 % reporta conexión inestable y extremadamente lenta, y otro 9,09% indica que el servicio es operativo en teoría, pero inaccesible por los cortes eléctricos.

Sobre **restricciones para documentar la emergencia**, el 45,45 % no ha registrado incidentes de censura, mientras que el 36,36 % denuncia que se prohíbe explícitamente a los vecinos fotografiar o filmar infraestructuras colapsadas, y un 18,18 % señala un bloqueo informativo local en el que las emisoras de radio o televisión evitan transmitir reportes sobre zonas de riesgo por temor a represalias.

“Situación bastante compleja y grave (...) existen muchos impedimentos por parte gubernamental; la falta de comunicación no permite tener información sobre la ayuda”³¹

En **energía eléctrica**, el 45,45 % de los consultados reporta un servicio restituido o funcionando con normalidad, el 27,27 % enfrenta fluctuaciones severas (“bajones”) que ponen en riesgo los equipos operativos, un 18,18 % padece apagones prolongados de más de 12 horas diarias, y un 9,09% señala que el servicio está caído por completo desde el día del sismo. Respecto a la infraestructura dañada, el 90,91 % afirma que CORPOELEC no ha publicado ningún cronograma de contingencia o racionamiento, y el 9,09 % restante indica que solo se publican avisos genéricos de “recuperación del sistema” sin precisar zonas ni plazos.

En agua potable, el 72,72 % reporta suspensión total del servicio por tuberías, obligando a recolectar agua de fuentes no seguras; un 18,18 % depende exclusivamente de camiones cisterna privados a costos elevados; y solo un 9,09 % mantiene un servicio regular y potable. El 90,91 % de los consultados señala que las hidrológicas locales no han difundido información sobre la calidad del agua o planes de distribución alternativa, mientras que el 9,09 % restante indica que se emiten comunicados de “normalidad en las plantas de tratamiento” que contradicen la falta de agua reportada por las comunidades.

En materia de gas doméstico, el 81,81 % percibe estabilidad en el suministro por tubería o venta de cilindros, mientras que el 18,18 % reporta una distribución paralizada sin explicaciones oficiales, presuntamente por daños en las vías de acceso.

³¹ Respuesta abierta de formulario digital (Servicios básicos e incomunicación post-terremoto, La Guaira). Recolección de datos, 23 de julio de 2026.

“ Después del terremoto han entregado dos veces los cilindros de gas de forma gratuita, hasta ahora ”³²

En cuanto a **desechos sólidos**, el 54,54 % califica la recolección como esporádica e insuficiente frente a la acumulación de escombros, el 36,36% percibe un servicio regular con despeje operativo de vías, y el 9,09 % reporta una paralización total que ha generado vertederos improvisados y focos de insalubridad en áreas residenciales.

“ No hay información, sólo sabemos cuándo vemos las máquinas o cuando recolectan los desechos ”³³

Sobre la **difusión de planes de contingencia municipal para el manejo de desechos y distribución de gas**, el 54,55 % denuncia un silencio oficial absoluto, mientras que el 45,45 % califica la información disponible como escasa, contradictoria o dependiente de canales no oficiales.

C) Censura y opacidad hospitalaria post-sismo

En cuanto a **la difusión de cifras sobre fallecidos y heridos**, el 66,64 % de los consultados señala que la información fluye libremente, mientras que el 33,32 % reporta instrucciones verbales directas para no dar información o contactos a periodistas. El 100 % coincide en que **no se ha restringido, prohibido ni condicionado el acceso físico de periodistas independientes, reporteros gráficos o defensores de derechos humanos a las instalaciones, áreas de emergencia o morgues**.

Aunque el 100% reportó que no se ha restringido el acceso a periodistas, reporteros y defensores de DDHH a los centros hospitalarios, un 16,66 % identifica como responsables de estas restricciones a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), y el 16,66 % indica que inicialmente fueron los cuerpos de seguridad del Estado (GNB, PNB, SEBIN, DGCIM).

En materia de **insumos médico-quirúrgicos**, el 66,64 % reporta una falta absoluta de stock en los centros de salud que obliga al personal de guardia a solicitar a los familiares la adquisición externa de insumos, mientras que el 33,32 % señala un suministro regular acorde con la demanda y gravedad médica. El 100 % confirma que no se ha publicado ningún reporte técnico de ingresos, ejecución de partidas ni compras de emergencia en las carteleras informativas institucionales.

Respecto a la **ayuda humanitaria**, el 100 % de los consultados indica que las organizaciones donantes lograron ingresar y entregar los insumos de forma directa bajo supervisión de los jefes de servicio médico, y el 100 % también señala que no existe un **registro público o automatizado**

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

donde el Estado rinda cuentas sobre el ingreso y destino de esa ayuda; el control de inventario recae en el propio personal voluntario. En esta misma línea, el 100 % de los consultados afirma que el personal médico que atiende la emergencia es voluntario, trasladado desde otros estados que autogestionan sus horarios y guardias.

De hecho, los propios encuestados atribuyen la ausencia de censura formal precisamente a este vacío estatal:



El Estado no ha ayudado en nada, el verdadero protagonista es el pueblo venezolano que desde el primer momento no ha dejado de bajar y traer donaciones, también lo que hay en los insumos es de organizaciones internacionales



En efecto, el 83,3 % de los consultados atribuyen la ausencia de restricciones u órdenes explícitas de censura hacia el personal médico a que la gestión descansa en el voluntariado externo y el Estado mantiene un rol pasivo o ausente, mientras que el 16,7 % considera que el personal médico evita emitir declaraciones políticas o críticas para proteger la operatividad de las donaciones.

En **cuanto al decomiso o borrado de material fotográfico o audiovisual**, el 100 % no registra incidentes de este tipo, y el 100 % tampoco reporta despidos, suspensiones de sueldo o procedimientos administrativos contra el personal del centro de salud tras el sismo. Sobre la fuente principal de insumos, el 83,3 % señala donaciones directas de organizaciones humanitarias o agencias internacionales, y el 16,7 % aportes propios del voluntariado y la recolección comunitaria.

Finalmente, respecto a la disponibilidad de carteleras públicas para la localización de pacientes, el 49,98 % de los consultados indica que no existe ningún tipo de información pública, el 16,66 % califica la información disponible como parcial, desactualizada o confusa y el otro 16,66 % confirma que el centro mantiene un registro público y ordenado. Por último, el 100 % de los consultados coincide en no se ha condicionado la entrega de insumos médicos ni la atención a los heridos a cambio de exigir silencio sobre las condiciones del recinto hospitalario.

³⁴ Respuesta abierta de formulario digital (Censura y opacidad hospitalaria pos-tsismo, La Guaira). Recolección de datos, 23 de julio de 2026.

V. Análisis comparativo: El epicentro de La Guaira frente a la tendencia en el resto de los estados

A) Desproporción en el colapso de los servicios básicos y telecomunicaciones

El **suministro de agua potable** refleja que el impacto ha sido más crítico en La Guaira que en el resto del país, ya que en los demás estados, la suspensión total del servicio por tuberías afecta al 13 % de las comunidades evaluadas; en contraste, en el estado La Guaira esta cifra asciende drásticamente, con un 72,72 % de la población consultada reportando un corte total, viéndose en la necesidad de consumir agua de fuentes no seguras o de dudosa procedencia. Sin embargo, ambos resultados coinciden en que las compañías hidrológicas locales **no emiten reportes informando sobre la problemática**.

En materia eléctrica, la falta de información en La Guaira refleja la tendencia nacional el 90,91% de los encuestados desconoce los cronogramas de racionamiento de Corpoelec, frente al 95,7 % del resto del país. En cuanto a las fallas, la entidad presenta cifras menores que el promedio nacional; las fluctuaciones severas (bajones que ponen en riesgo el patrimonio familiar) se sitúan en 27,27 % (versus 56,5 %) y los apagones prolongados de más de 12 horas se ubican en 18,18 % frente al 21,7 % reportado en el resto de los estados.

La falta de energía eléctrica afecta la comunicación, la cual es esencial para el reporte de emergencias, solicitar ayuda e informar sobre el bienestar de las personas afectadas por el terremoto. A nivel nacional el 30,4 % reportó que debido a las fallas eléctricas el **internet fijo** no estaba operativo, mientras que en La Guaira el 63,63 % de los consultados señaló que la estatal CANTV ni siquiera opera en sus sectores. Esto evidencia que el problema de conectividad a internet es debido a la ausencia de Estado, más que por la emergencia provocada por el terremoto. Aunado a ello, la señal telefónica sigue siendo intermitente (con un 45,45 % reportado) a casi más de un mes del sismo, una proporción menor a la registrada en los demás estados del país (60,9 %).

En gas doméstico y desechos sólidos, se evidencia un marcado contraste en el suministro de gas doméstico frente a una crisis más homogénea en la recolección de basura. Por un lado, el suministro de gas muestra una profunda brecha: mientras en los demás estados solo el 39,1 % goza de estabilidad y la mayoría padece irregularidades graves, como cobros excesivos, desvíos de cilindros y el uso forzado de leña que genera riesgos respiratorios, La Guaira exhibe un escenario favorable con un 81,81 % de continuidad en el servicio. No obstante, ambas escalas comparten una vulnerabilidad logística, pues cerca del 18 % sufre paralizaciones que presuntamente responden al daño en las vías de acceso.

Por otro lado, el manejo de desechos sólidos presenta un desafío importante tanto en La Guaira como en los demás estados, con una operatividad regular que apenas ronda entre el 36 % y el 39 %, respectivamente. Sin embargo, los matices del problema varían a nivel nacional, la insuficiencia del servicio (47,8 %) y la paralización total (13 %) han derivado en vertederos improvisados con riesgo sanitario, mientras que en La Guaira la recolección esporádica es aún

mayor (54,54 %) y está directamente condicionada por una emergencia específica, al verse la capacidad local rebasada por la acumulación de escombros tras un reciente sismo.

La comparación de los resultados recabados en ambas muestras confirma que tras el terremoto, la opacidad en materia de servicios básicos se agudizó en La Guaira y se mantuvo en el resto del país, en ciertos casos esta agudización no responde a la emergencia por terremoto, sino a problemas estructurales y el silencio absoluto por parte del estado y las empresas encargadas.

En materia de acceso a la información pública, tanto a nivel nacional como en La Guaira hay una vulneración caracterizada por la opacidad gubernamental, aunque con marcadas diferencias en su severidad. Mientras que a nivel nacional el 91,3 % de la población sufre esta indefensión, dividida entre un 47,8 % de silencio oficial absoluto y un 43,5 % de información basada en rumores, en La Guaira la situación es aún más extrema, ya que la totalidad de los encuestados reporta desinformación (54,55 % bajo un mutismo oficial absoluto y 45,45 % dependiendo de canales no oficiales). Esto contrasta fuertemente con el panorama nacional, donde al menos un escaso 8,7 % logra acceder a cronogramas transparentes, una cifra completamente baja en la región guaireña.

Los testimonios locales respaldan esta aguda desconexión entre autoridades y ciudadanos, reflejando frustración ante la falta de directrices para resolver problemas derivados del sismo (como fallas eléctricas que afectan los ascensores) y reiterando repetidamente que *“no hay información de nada”*³⁵. Sin embargo, surge un contraste paradójico entre este “apagón informativo” y la acción sobre el terreno: aunque los ciudadanos afirman ignorar los planes de contingencia y enterarse de la gestión solo *“cuando ven las máquinas recolectando desechos”*³⁶, también reportan haber recibido asistencia tangible pero no comunicada previamente, como la entrega gratuita de cilindros de gas en un par de ocasiones tras el terremoto.

B) Dinámicas de censura y control: coerción estatal vs. ausencia estatal

En el sector hospitalario, La Guaira presenta un panorama más favorable que el promedio nacional en materia de acceso a la prensa, el 100 % de los consultados en el estado confirma que los periodistas pueden ingresar e informar sin inconvenientes y no se reportan decomisos de equipos ni amenazas al personal; mientras que en el resto del país el 70 % afirmó que el personal de salud siente temor a declarar por miedo a represalias, y 60 % señala que se les prohíbe administrativamente el acceso a periodistas.

Este comportamiento encuentra su justificación en el perfil de quienes atienden la emergencia, no es porque el Estado ya no obstaculice la labor periodística en los centros de salud, sino que en el resto de los hospitales del interior del país opera el personal adscrito al Ministerio de Salud bajo estructuras de mando tradicional, pero en La Guaira los encuestados afirman que el 100 % del personal médico que atiende la emergencia son voluntarios trasladados de otros estados, que auto gestionan sus horarios y guardias.

³⁵ Respuesta abierta de formulario digital (Servicios básicos e incomunicación post-terremoto, La Guaira). Recolección de datos, 23 de julio de 2026.

³⁶ Ibidem.

médico en los almacenes, 83,3 % reportó que la principal fuente de los insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos utilizados para atender la contingencia son las donaciones directas de organizaciones humanitarias o agencias internacionales, y 16,7 % respondió que eran aportes propios del voluntariado y recolección comunitaria. De igual manera, el 66,64 % de los consultados en La Guaira señala que la información sobre fallecidos y heridos fluye libremente, una proporción más alta que el 20 % reportado a nivel nacional.

En ese sentido, el 100 % afirma que el control de inventario de las donaciones lo lleva el propio personal voluntario de forma independiente y 83,3 % del personal en el litoral central atribuye esta libertad de información en los hospitales a la ausencia del Estado frente a la emergencia, lo cual confirman que la disminución de la censura hospitalaria en la zona no obedece a una política de transparencia institucional, sino a la ausencia operativa de las autoridades estatales frente al despliegue del voluntariado y las agencias humanitarias.

C) Restricciones a la documentación comunitaria

El patrón de silenciamiento a través del chantaje se mantiene presente en ambas mediciones. En el resto de los estados, el 17,4 % de las comunidades reportó amenazas directas de funcionarios, como el retiro de las bolsas de alimentos CLAP, para impedir la difusión información sobre las infraestructuras colapsadas; pero en La Guaira esta práctica es mucho mayor, donde el 36,36 % de los encuestados indicó que se ha prohibido explícitamente a los vecinos tomar fotos o videos de infraestructuras colapsadas (postes, tuberías, vías) y 18,18 % reporta que las emisoras de radio o TV no transmiten reportes sobre zonas de riesgo por temor a represalias.

D) Gestión de riesgo ambiental y bloqueo de datos técnicos

Al contrastar el panorama en los demás estados con la situación específica de La Guaira, en la región litoral la afectación es mayor. Mientras que en el resto del país la presencia de grietas profundas y la reactivación de fallas geológicas representan el 50 % de las incidencias, en La Guaira esta cifra se eleva al 60 %. La diferencia es aún más pronunciada en cuanto al impacto en la infraestructura porque en el interior del país los daños estructurales severos en edificaciones y vías son del 25 %, pero en La Guaira este indicador escala hasta un 40 %. Estos datos hacen ver que el impacto del terremoto del pasado 24 de junio de 2026 fue de mayor intensidad en La Guaira que en el resto de los estados evaluados.

En lo que respecta a la transparencia institucional y acceso a la información técnica es escasa tanto en la Guaira como en los demás estados. En el resto del país, el 100 % coinciden en que la información que da el gobierno, como mapas de riesgo o zonas de evacuación, es incompleta, contradictoria, de difícil acceso o se encuentra desactualizada. En La Guaira pasa casi igual, el 80 % dice que la información es escasa, pero hay un 20 % que va más allá y asegura que las autoridades están ocultando todo, negando o restándole importancia al riesgo real.

Por otra parte, respecto a la labor de evaluación científica, las barreras institucionales operan de forma casi idéntica en ambas escalas, tanto en el resto de los estados (100 %) como la mayoría en

La Guaira (80 %) indican que el Estado ejerce un bloqueo técnico donde si bien no se prohíbe físicamente el acceso a las zonas afectadas para expertos e investigadores, se les niega sistemáticamente la data técnica base, lo cual resulta indispensable para el desarrollo de cualquier estudio estructural o geológico independiente.

E) Devastación asimétrica del ecosistema de medios

El impacto sobre la infraestructura mediática difiere según la vulnerabilidad geológica de cada entidad. En el estado Carabobo, la amplificación sísmica afectó entre 34 y 40 trabajadores radiales y obligó a emisoras de gran alcance como Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 a iniciar procesos de reubicación por daños estructurales en sus sedes. Sin embargo, en La Guaira el colapso fue absoluto, el sector radial sufrió la pérdida total de infraestructuras clave por derrumbes o incendios, dejando inoperativas a emisoras como RNV, Enlace RV, Radio Coral y Radio Urimare. Esta destrucción de las plataformas de transmisión locales profundiza el cerco comunicacional en el epicentro, limitando aún más el acceso de la ciudadanía a información vital.

VI. Conclusiones, exigencias y recomendaciones

El levantamiento de datos realizado entre el 17 y el 21 de julio de 2026, ampliado con una jornada focalizada en La Guaira el 23 de julio, evidencia un patrón sistemático y transversal de opacidad institucional frente a la contingencia sísmica del 24 de junio, que se manifiesta de manera consistente en los tres ejes evaluados: gestión de riesgo ambiental, sector salud y servicios básicos. En los tres casos, la constante no es la ausencia puntual de información, sino la negativa reiterada del Estado a producirla, publicarla o entregarla a quienes la solicitan (comunidades, personal de salud, periodistas y expertos independientes), lo que constituye una vulneración directa al principio de máxima divulgación y a los estándares fijados en el artículo 143 de la CRBV, el artículo 19 del PIDCP y el artículo 13 de la CADH.

La **comparación entre La Guaira y el resto de los estados confirma que esta opacidad no solo se mantiene, sino que se agudiza en el epicentro**; mientras que en el ámbito nacional el 91,3 % de la población se encuentra en estado de indefensión informativa, en La Guaira esa cifra alcanza el 100 %, sin que ningún encuestado logre acceder a cronogramas oficiales transparentes.

La **censura** documentada no opera, en su mayoría, mediante órdenes formales, sino a través de mecanismos difusos de intimidación, órdenes verbales y temor a represalias, lo que la hace más difícil de acreditar jurídicamente pero no por eso es inexistente. El 70 % del personal de salud consultado teme informar y el 60% de los centros restringe el acceso de la prensa por “órdenes superiores”.

Este patrón de coerción, sin embargo, no se replica de igual forma en La Guaira, donde el 100 % de los consultados reporta libre acceso de la prensa a los centros de salud; el contraste no revela una mayor apertura institucional, sino **la ausencia casi total del Estado en la zona**, cuya atención médica de emergencia recae en un 100 % sobre personal voluntario que autogestiona sus horarios al margen de las estructuras de mando del Ministerio de Salud.

En materia de **documentación ciudadana**, en cambio, la coerción es más aguda en el litoral central, el 36,36 % de los encuestados en La Guaira denunció la prohibición explícita de fotografiar infraestructuras colapsadas, frente al 17,4 % reportado en el resto de los estados, donde además prevalece la amenaza de retiro de beneficios sociales (CLAP) como mecanismo disuasorio.

El **colapso simultáneo de electricidad, telecomunicaciones, agua y gas doméstico** no solo agrava las condiciones materiales de vida, sino que produce un efecto multiplicador sobre el derecho a la información. Esta desprotección es asimétrica, en materia de agua potable, La Guaira concentra el impacto más severo del país, con un 72,72 % de corte total del servicio frente al 13 % del resto de los estados; en conectividad, el 63,63 % de los guaireños reporta que la estatal CANTV directamente no opera en su sector, un déficit que, a diferencia de las fallas eléctricas que sí se explican por el sismo, evidencia una ausencia estatal estructural y previa a la contingencia.

En **energía eléctrica y gas doméstico**, en cambio, La Guaira presenta indicadores comparativamente menos críticos que el promedio nacional, lo que confirma que el patrón de opacidad y colapso no es homogéneo, sino que responde a la combinación específica de vulnerabilidad geológica, infraestructura preexistente y grado de abandono institucional de cada territorio.

A esto se suma un daño estructural directo a la infraestructura mediática en las zonas de mayor impacto, con una intensidad marcadamente mayor en La Guaira que en Carabobo; mientras en Carabobo entre 34 y 40 trabajadores radiales resultaron afectados y las emisoras debieron iniciar procesos de reubicación, en La Guaira el colapso fue absoluto, con la pérdida total de al menos cuatro sedes radiales (RNV, Enlace RV, Radio Coral y Radio Urimare) por derrumbes, incendios o daños estructurales severos. Esta destrucción debilita precisamente los canales que, en un contexto de emergencia, deberían servir de contrapeso a la opacidad oficial, y agrava el cerco comunicacional en el epicentro del doblete sísmico.

Aunque las muestras son reducidas y no representativa de todo el país, la consistencia de los patrones de opacidad es casi absoluta en materia presupuestaria (90 % en el ámbito nacional y 100 % en La Guaira respecto a la rendición de cuentas sobre ayuda humanitaria), ausencia de mapas de riesgo actualizados (100 % en todo el país y 80 % en La Guaira) y bloqueo del acceso a datos técnicos a expertos independientes (100 % en el territorio nacional y 80 % en La Guaira), permite afirmar que se trata de una tendencia estructural y no de hechos aislados.

A ello se suma la brecha detectada entre las cifras oficiales y las de organismos internacionales, mientras el Estado reconoce 3.685 fallecidos, OCHA reporta 5.398, y mientras Funvisis evita el término “doblete sísmico” utilizado por el USGS, persiste sin publicar cifras sobre damnificados, población en necesidad, edificaciones afectadas o pérdidas materiales. Espacio Público reitera que, al cierre de este informe, ninguna de las peticiones formales de información dirigidas a los ministerios de Salud y Ecosocialismo ha sido respondida, lo cual confirma el patrón de hermetismo descrito.

Exigencias:

- La publicación inmediata de cronogramas de racionamiento y planes de contingencia sectoriales, con especial urgencia en el estado La Guaira.
- El acceso libre de expertos independientes a datos técnicos sobre riesgo geológico, particularmente en el litoral central, donde la afectación estructural es proporcionalmente mayor.
- El cese de las restricciones administrativas e informales al trabajo periodístico y a la documentación ciudadana en centros de salud y comunidades;
- La homologación de las cifras oficiales con los estándares de reporte de organismos internacionales como OCHA, a fin de cerrar la brecha de información detectada.

Exigencias:

- La rendición de cuentas pública, detallada y accesible sobre la ejecución de presupuestos de emergencia, compras extraordinarias y la recepción, gestión y distribución de la ayuda humanitaria.
- La prohibición expresa del uso de los programas de asistencia social (como las bolsas CLAP) como mecanismo de coacción institucional para censurar la documentación ciudadana del desastre.
- La respuesta oportuna, formal y técnica a las solicitudes de información ciudadana realizadas el 17 de junio de 2026 a los ministerios de Salud y Ecosocialismo para cesar la política de silencio administrativo.

Recomendaciones:

1. Adopción del principio de máxima divulgación: el Estado venezolano debe asumir y aplicar los estándares internacionales en materia del derecho de acceso a la información pública, los cuales establecen que el Estado no es dueño de la información, sino su custodio de los datos.

2. Implementación de políticas de transparencia activa: se recomienda la creación urgente de plataformas digitales con datos actualizados y canales físicos (carteleros, boletines locales) centralizados, y de libre acceso como los boletines epidemiológicos, cifras consolidadas de víctimas, mapas de riesgo geológico actualizados, estado de la infraestructura pública y balances sobre los planes de reconstrucción.

3. Garantías para el ejercicio del periodismo y la veeduría ciudadana: es imperativo que el Ejecutivo Nacional y las autoridades regionales emitan directrices claras que prohíban y sancionen cualquier forma de amedrentamiento, censura o represalia contra periodistas, personal médico, voluntarios y ciudadanos que documenten o difundan información sobre las consecuencias del sismo. Los centros de salud, las zonas de desastre y los centros de acopio son espacios de interés público donde no deben prevalecer “órdenes superiores” que limiten el libre flujo de la información.

4. Recuperación prioritaria del ecosistema de telecomunicaciones y medios: Se recomienda al Estado priorizar la inversión y ejecución presupuestaria para el restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones (CANTV y operadoras móviles) y garantizar el suministro eléctrico en las zonas más afectadas, como La Guaira. Asimismo, facilitar mecanismos administrativos, exoneraciones o apoyos técnicos que permitan la pronta recuperación de las emisoras de radio comunitarias y privadas (como RNV, Enlace RV, Radio Coral, entre otras) que perdieron su infraestructura física, dada su importancia vital como canales de comunicación de proximidad para mitigar la desinformación y el pánico en las comunidades.

5. Formar a sus equipos de trabajo en cuanto al derecho humano de acceso a la información pública durante desastres naturales.